

DISCURSO DE S.E EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EL
INFORME DE LA COMISION DE VERDAD Y RECONCILIACION

Compatriotas,



Esta noche me dirijo a Uds. para tratar de un tema doloroso que aún divide a los chilenos: el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.

Al asumir el Gobierno, dije que ésta es una herida abierta en el alma nacional, que sólo podríamos cicatrizar si procuráramos reconciliarnos sobre las bases de la verdad y de la justicia.

Con ese propósito, constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrándola con personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, para que luego de recibir, recoger y analizar todos los antecedentes que les fuera posible, emitieran en conciencia un Informe sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Expresamente precisamos que, para estos efectos, se entendería por graves violaciones "las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos".

Al cabo de nueve meses de esforzada labor, la Comisión emitió dicho Informe, acordado por la unanimidad de sus miembros, del que me hizo pública entrega el 8 de febrero recién pasado. Cumpliendo lo entonces anunciado, hoy lo pongo en conocimiento del país, para lo cual se ha hecho entrega de su texto íntegro a las más altas autoridades públicas, sociales y morales de la Nación y a los medios de comunicación.

Después de haber leído cuidadosamente el Informe, creo mi deber reiterar, en esta oportunidad, el reconocimiento que merecen los integrantes de la Comisión y sus colaboradores, por la abnegación, espíritu público, eficiencia, responsabilidad y objetividad con que cumplieron su tarea. Pienso que su valioso aporte compromete la gratitud de todos los chilenos.

I.- ¿QUE DICE EL INFORME?

1º.- Relación de Hechos

En sus primeras 1094 páginas, luego de definir conceptos y describir el marco histórico político y el marco jurídico institucional en que los hechos acontecieron, relata por orden cronológico todos los casos en que la Comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación de derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, individualizando a las víctimas y señalando los antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió.

Partiendo del concepto de que "existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no solamente por el Estado sino por todos los actores políticos" y acorde con el decreto que creó la Comisión, el Informe califica de violaciones a los derechos humanos "no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos".

La relación divide el período en tres etapas: primero, la comprendida entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en que hubo algunos enfrentamientos, detenciones masivas en casi todo el país, ejecuciones de muchos prisioneros políticos y los primeros desaparecimientos; luego, el período de la DINA, hasta agosto de 1977, en que se llevó a cabo una acción sistemática para exterminar a quienes ese organismo atribuía más peligrosidad política y se produjo el mayor número de desapariciones de personas, y finalmente, la etapa en que la DINA fue sustituida por la C.N.I., en la que, luego de un lapso de relativo apaciguamiento, se produjeron numerosas acciones violentas con resultados fatales, sea en atentados cometidos por grupos armados o terroristas, sea en operativos destinados a combatirlos, sea con motivo de las protestas que tuvieron lugar a partir de 1983.

En cada período se señalan la naturaleza y caracteres de los organismos represivos, los procedimientos preferentemente empleados por ellos, los lugares de detención, los métodos de tortura y de ejecución de las víctimas. Se relatan, también, los atentados a los derechos humanos cometidos por particulares bajo pretextos políticos y las acciones de violencia política de que resultaron víctimas fatales. Se reseña, asimismo, la actitud asumida ante esos hechos por los diversos actores de la sociedad civil: políticos, sociales, espirituales y medios de comunicación.

El balance de todo el período arroja 2279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas por la Comisión "víctimas de la violencia política" y 2115 calificadas de "víctimas de violación a sus derechos humanos".

Estos últimos, a su vez, se pueden clasificar en:

a) Muertos por agentes del Estado o por personas a su servicio:

- en virtud de Consejos de Guerra 59
- por exceso de represión durante las protestas 93
- en ejecuciones alegando ley de fuga 101
- en otras ejecuciones y muertos en tortura 815

subtotal 1.068

b) Detenidos por agentes del Estado y desaparecidos 957

c) Muertos por atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos 90

Total 2.115

El Informe precisa que la Comisión conoció otros 641 casos, que individualiza, respecto de los cuales no pudo formarse convicción y considera necesario que se continúe investigando.

La Comisión expresa que frente a estos hechos, "el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía" (p.126), lo que produjo "en alguna importante o involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales" (p.128).

2º.- Recomendaciones

En las 74 páginas siguientes (de la 1096 a la 1168) del Informe, la Comisión da cumplimiento al encargo que se le hizo en el decreto que la creó, de "recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia" y "las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir" nuevas violaciones a los derechos humanos.

A.- Reparación a las víctimas

Luego de expresar que "la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables", por lo que "no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas" que sugiere, el Informe señala que "la reparación moral y material parecen ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena entendiendo por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la

responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia" del Informe. Este precisa que "la reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena. Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas...El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro entre los chilenos" (p.1096).

En el plano de la reparación moral, propone "reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas" mediante actos que sugiere a modo ilustrativo. Propone, asimismo, establecer un procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas.

Las recomendaciones relativas al bienestar social tienden "a reparar el daño moral y patrimonial que afecta a los familiares directos de las víctimas", para lo cual propone, entre otras cosas, establecer por ley "una pensión única de reparación" y medidas destinadas a proporcionar a esos familiares una atención especializada en salud, formas de reparación en el plano educativo y con respecto a los problemas de vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del servicio militar a los hijos de las víctimas.

En este mismo orden de cosas, el Informe propone la creación de una Fundación de Derecho Público, autónoma, dirigida por un Consejo del más alto nivel y prestigio, que continúe las tareas de "tratar de determinar el paradero de las víctimas" de desaparecimiento, dictaminar acerca de los casos de posibles víctimas respecto de los cuales la Comisión no alcanzó a formarse convicción, centralizar y mantener los archivos y antecedentes sobre las violaciones a los derechos humanos, prestar asesoría legal y asistencia social a los familiares de las víctimas y las demás funciones que la ley le encomiende.

Frente al grave problema de "determinar el paradero de las víctimas" en los casos de "personas detenidas desaparecidas" y de "ejecutados sin entrega de los restos mortales a sus familiares", propone "penalizar el ocultamiento de este tipo de información" y, al mismo tiempo, "garantizar reserva y eximir de responsabilidad por su eventual participación, a quienes proporcionen estos antecedentes" (p.1161).

B.-Prevención de eventuales violaciones

Luego de señalar que "no existió en Chile, en la época en que estas violaciones se cometieron, una conciencia nacional suficientemente firme respecto del deber imperioso de respetar los derechos humanos", el Informe formula numerosas sugerencias para mejorar la legislación nacional en la materia, perfeccionar el Poder Judicial a fin de que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas, lograr en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad la plena conciencia sobre el valor de los derechos humanos y el consiguiente compromiso de respetarlos en el ejercicio de sus funciones, crear una institución cuya misión sea de protección de los derechos humanos y tratar de consolidar, a partir del sistema educacional y en todos los ámbitos de la vida social, una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos.

3º.- Víctimas

Finalmente, en un segundo volumen de 635 páginas, el Informe contiene una breve reseña biográfica, por orden alfabético, de cada una de las 2279 personas respecto de las cuales se formó la convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas de violación de sus derechos humanos o como víctimas de la violencia política, entre ellos 132 miembros de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad.

Hasta aquí el resumen del informe. Ojalá todos lo lean y mediten. Os invito a hacerlo.

II.- REFLEXIONES NECESARIAS

Permítanme ahora compartir con Uds. algunas reflexiones que golpean mi conciencia de ser humano, de chileno y de Presidente de la República a raíz de la lectura del Informe y de los intercambios de opiniones que he tenido a su respecto con personas representativas de diversos sectores de nuestra patria.

1º.- El tema de la verdad

El imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia. Esto es válido en los múltiples niveles de la vida social, desde el hogar hasta la comunidad universal; rige tanto para las relaciones familiares como para las relaciones en el seno de las Naciones y aún entre éstas.

Donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza entre las personas; surgen la duda, las descalificaciones y, consiguientemente, los odios y la tentación de la violencia. La mentira es la antesala de la violencia e incompatible con la paz.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denunciaban, otros -que sabían- las negaban, y quienes debieron investigarles, no lo hicieron. Se explica así que mucha gente, tal vez la mayoría, no creyera. Y esa discrepancia fue un nuevo factor de división y odiosidad entre los chilenos.

El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores -varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado -esa verdad debe ser aceptada por todos. Nadie, de buena fe, podría desconocerla.

No digo que sea una verdad "oficial". El Estado no tiene derecho a "imponer" una verdad. Pero, convencido de ella, yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos.

El reconocimiento de esta verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará la historia; pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe. Como éste asevera, "la situación al 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus trasgresiones, pero en ningún caso las justificaron" (p.24).

Tampoco puede invocarse, para negar o desconocer esta verdad, un supuesto estado de "guerra interna" que habría existido, ni la necesidad de defender a la Patria del terrorismo. Todos sabemos -y el Informe lo establece- que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control total del país muy rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos.

2º.- El tema del perdón y la reconciliación

Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner "punto final" a este asunto. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el futuro que nos une más que al pasado que nos separa. Es mucho lo que tenemos que hacer para construir una sociedad verdaderamente democrática, impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia social, para que desgastemos nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables. Y nos recuerdan las palabras de S.S. Juan Pablo II en su visita: "Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconciliación".

¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quienes son los ofendidos llamados a perdonar y quienes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y de la otra, generosidad.

Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el Informe son compartidas por todos los sectores.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo.

El pueblo de Chile siempre ha querido y admirado a sus Instituciones Armadas y de Orden. Ellas se identifican con las glorias de la Patria, con el espíritu varonil de los chilenos y con abnegadas acciones en la vida cotidiana o frente a graves emergencias. El anhelo de reconciliación, en un Chile verdaderamente unido, exige remover los obstáculos que aún perjudican esos sentimientos. Todos debemos contribuir a ello.

He dicho en más de una ocasión que mi mayor anhelo como gobernante es alcanzar la unidad nacional en democracia. Ello exige de todos y de cada uno un gran esfuerzo para ponerse en el lugar de los demás y procurar comprenderlos, con humildad para reconocer las propias faltas y limitaciones y generosidad para perdonar las ajenas.

3º El tema de la justicia

La justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz.

Sabemos que, por las limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo. Lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible.

La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia. Quien lo hace se convierte también en delincuente contra los derechos humanos y merece la mayor condenación social. Admitir la vindicta privada es sustituir el derecho por la violencia, en que la ley de la fuerza prevalece sobre la razón y la justicia.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas. También importan actos de justicia, la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone.

Pero ello no basta. La justicia exige, también, que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero.

En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales.

En uno y otro caso, la Comisión ha enviado los antecedentes respectivos al tribunal correspondiente. Espero que éstos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual -en mi concepto- no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente.

4º.- Terrorismo y violencia

Los criterios expuestos no deben ser interpretados por nadie como signos de tolerancia o debilidad en la lucha contra el terrorismo y la violencia de sectores extremistas.

Es decisión de mi gobierno combatir con la mayor energía el terrorismo y toda forma de violencia, de quienquiera que provenga. Lo importante es encontrar mecanismos eficaces para derrotarlos y ponerles término. La experiencia de otros países demuestra que los caminos del derecho son para ello más eficaces que la simple confrontación armada. Nos resistimos a aceptar que para combatir el terrorismo, repudiable entre otras razones porque viola los derechos humanos, sea indispensable emplear métodos que incurran en análogas violaciones, porque tales métodos, moralmente inaceptables, ayudan en la práctica a alimentar la espiral de la violencia.

III. DECISIONES

En presencia del Informe que he reseñado, teniendo en cuenta las reflexiones precedentes y a fin de encarar los problemas derivados de las violaciones de derechos humanos con la mayor responsabilidad, eficacia y prontitud, creo necesario adoptar las medidas que paso a enunciar:

1º.- Hago un ferviente llamado a todos mis compatriotas a aceptar la Verdad que se expone en el Informe y a ajustar su conducta a ese reconocimiento;

2º.- Acogiendo la sugerencia del Informe, reivindicó pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas en cuanto hayan sido denigradas por acusaciones de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse.

3º.- En el curso del presente mes, el Gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para concretar las proposiciones del Informe en cuanto a pensión única de reparación a los familiares directos de las víctimas, procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas, otras prestaciones de carácter social y creación de una institución de Derecho Público que se haga cargo de las tareas que el Informe señala;

4º.- Hoy mismo he enviado a la Corte Suprema un oficio en que le adjunto el texto del Informe y le solicito que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya a los tribunales correspondientes para que activen con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión de Verdad y Reconciliación les remitió, haciéndole presente que en mi concepto, la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial y se determinen las responsabilidades, especialmente en los casos de personas desaparecidas;

5º.- El Gobierno pedirá por intermedio del Ministro de Justicia y con arreglo al art. 26 bis del Código de Procedimiento Penal, la intervención del Ministerio Público en primera instancia cada vez que lo estime necesario;

6º.- Personalmente he pedido a los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al señor General Director de Carabineros la cooperación de sus instituciones para establecer el paradero de los detenidos desaparecidos y de los ajusticiados cuyos restos no han sido entregados a sus familiares;

7º.- El Gobierno dará instrucciones especiales a los Servicios de Orden y Seguridad Pública para que presten la más diligente cooperación a los Tribunales de Justicia para el éxito de las investigaciones en los casos referidos;

8º.- Se enviará próximamente al Congreso Nacional el proyecto de ley, que le fue propuesto por el Capítulo Chileno del Ombudsman y que el Gobierno ha hecho suyo, para crear la institución del Defensor del Pueblo, que se encargará fundamentalmente de cautelar el respeto y plena vigencia de los derechos humanos; y

9º.- Finalmente, el Ministerio de Justicia constituirá a la mayor brevedad un equipo de trabajo que prepare el o los proyectos de ley necesarios para introducir en nuestra legislación las reformas que la Comisión de Verdad y Reconciliación sugiere para la mejor protección de los derechos humanos.

Independientemente de lo expuesto creo oportuno anunciar que, coincidiendo con algunas de las sugerencias del Informe, el Gobierno tiene preparados los proyectos de ley necesarios para perfeccionar y modernizar la Administración de Justicia. Siendo ésta una materia en que existe muy alto consenso nacional, es mi propósito procurar rápidamente los acuerdos necesarios para que dicha reforma judicial pueda presentarse próximamente en términos que faciliten su debate y aprobación parlamentaria en el más breve lapso.

IV.- RUEGO A LOS CHILENOS

Al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que NUNCA MAS en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta es tarea de todos, de la que nadie puede excluirse.

Si el dolor, el espanto y la justa indignación nos movieran al odio y a la violencia, pronto caeríamos en lo mismo. Sería reanudar la lucha fratricida, destruir nuestra renaciente democracia y renunciar al anhelo de paz que todos abrigamos.

Todos los chilenos pueden tener la certeza de que el gobierno cumplirá su deber, consecuente con los principios morales que lo inspiran, sin otras miras que la justicia, la reconciliación y el bien común de la Patria.

Pero ésta no es sólo tarea del gobierno. Lo es igualmente de los otros Poderes del Estado, de las Instituciones Armadas, de las autoridades espirituales, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad nacional. A todos pido su cooperación para que juntos, respetándonos y ayudándonos, con comprensión y generosidad, hagamos lo necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de justicia, de progreso y de paz para Chile.

4 de marzo de 1991

ADDRESS OF H.E THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHILE

ON THE OCCASION OF THE RELEASE OF THE

"COMMISSION OF TRUTH AND RECONCILIATION" REPORT.

Fellow countrymen:

I am addressing you this evening to talk about a painful matter that is still dividing the Chilean people: The violations of Human Rights that were perpetrated in recent years.

When I took office, I described it as an open wound in the national soul that can only be healed through a reconciliation based on truth and justice.

To this end, we formed the "National Commission of Truth and Reconciliation" with the participation of personalities of acknowledged prestige and moral authority in the country. Their task was to receive, compile and analyze all available information, so that they should issue, according to their own conscience, a Report on the grave violations of Human Rights perpetrated in Chile between September 11th 1973 and March 11th 1990. We clearly stated at the time that we would consider as grave violations " the situation of persons detained-disappeared, those executed and the dead as the result of torture that involved

2.

the moral responsibility of the State, through actions of its agents or other persons under their authority. Abductions and aggressions against the lives of individuals perpetrated by private persons under political pretexts, also come into the same category".

After nine months of arduous work, the Commission issued the Report, with the unanimous agreement of all its members and delivered it to me on February 8th of this year. In fulfilment of my commitment, today I publicly release it to the country. The full text of the Report has been sent to the highest public, social and moral authorities of the Nation and to the communications Media.

After a careful reading of the Report, I consider it my duty to reiterate on this occasion the recognition that the members of the Commission and their collaborators deserve for the dedication, public spirit, efficiency, responsibility and objectivity with which they performed their task. I believe that their valuable contribution deserves the gratitude of all Chileans.

1- WHAT DOES THE REPORT SAY?

1° Account of Facts.

In its first 1094 pages, the Report defines the concepts and describes the political, juridical and institutional framework in which the events took place. It goes on to narrate in chronological order all the cases in which the Commission came to the conclusion that violations of Human Rights had occurred, resulting in death or disappearance. It individualizes the victims and indicates the background and circumstances in which the facts took place.

Based on the concept that "there are certain values of humanity that must be respected not only by the State, but by all political actors", and according to the decree that created the Commission, the Report qualifies as violations of Human Rights "not only certain actions perpetrated by agents of the State, but also by private individuals who act under political pretexts."

The Report divides the period in three stages: first, between September 11th 1973, when some confrontations and massive detentions, the execution of numerous political prisoners and the first disappearances of individuals occurred. Then comes the period of the activities of DINA (Intelligence Agency) in which a systematic action

was carried out to exterminate those considered by this body as politically dangerous and when the greatest number of disappearances of persons occurred. Finally came the stage in which DINA was replaced by CNI (National Central of Intelligence) when after a lapse of relative appeasement, many violent actions with fatal consequences took place, whether through aggressions perpetrated by armed groups or terrorists, or in operations conducted to fight them, as well as on the occasion of public demonstrations of protest that started in 1983.

The Report indicates in each period, the nature and characteristics of the repression agencies, the procedures followed by each of them, the detention sites, the methods of torture and execution of the victims. There is also a description of the violations of Human Rights perpetrated by private individuals under political pretexts and the actions of political violence that resulted in death. The Report includes an account of the way in which the political, social and spiritual actors of civilian society, along with the communications media, reacted towards these actions.

The balance of the whole period yields 2279 victims, out of which 164 were considered by the Commission as "victims of political violence" and 2115 as "victims of violations of Human Rights".

The last ones may be classified as:

a) Dead through the action of State agents
or through the action of individuals under
their authority:

- By virtue of a Council of War.	59
- Through excessive repression during demonstrations of protest.	93
- Through executions for breaking the "Escape Law"	101
- Through other executions, and dead through torture	815
	<hr/>
subtotal	1.068

b) Persons detained-disappeared through the
action of State agents. 957

c) Dead through aggressions perpetrated by private
individuals under political pretexts 90

Total 2.115

The Report specifies that the Commission studied 641 more cases, clearly individualized, about which it could not come to a full conviction. Further investigation is considered necessary.

The Commission states that, before these facts, "the Judiciary did not react with sufficient energy" (Pg.126). This resulted "to a considerable extent - even if in some cases it might have been unwillingly- in a worsening of the systematic violations of Human Rights at the time in which they were happening, since no protection was given to people detained in cases reported, and also because it granted the agents of repression a growing certainty of impunity for their criminal actions." (pg.128)

2° RECOMMENDATIONS

In the following 74 pages (from 1096 to 1168) of the Report, the Commission complies with the mission entrusted to it in the decree that created it, of "recommending the measures of reparation and rehabilitation it may deem just" and "the legal and administrative measures that should be adopted in order to prevent or forestall" new violations of Human Rights.

A.- Reparation to the victims.

After stating that "the disappearance or death of a loved one is an irreparable loss " and therefore "it is impossible to establish an analogy between the pain, impotence and the hopes of the victims with the measures it suggests", the Report indicates that "the moral and material reparation seems to be an absolutely necessary task for the transition

7

towards a full democracy. Reparation is understood as a number of actions that express the recognition and responsibility belonging to the State in the facts and circumstances that are the matter of the Report". It goes on to specify that "reparation must convoke the whole of Chilean society. It has to be a process that will lead it to recognize the facts according to truth, to dignify the victims in their moral character and to obtain a better quality of life for the families directly affected. The process of reparation supposes the courage to face truth and the action of Justice. It demands generosity to acknowledge faults and attitudes of forgiveness to attain the reconciliation of all Chileans" (Pg. 1096).

At the level of moral reparation it proposes "to publicly rehabilitate the good character of the victims" by means of actions it suggests as examples. It likewise proposes to establish a special procedure of declaration of death for persons detained- disappeared.

The recommendations related to social welfare tend "to repair the moral and patrimonial damage that affects the immediate relatives of the victims". To this end it proposes, among other things, to establish by law "the granting of a given sum for one single time and measures destined to provide those relatives with specialized health care ,

education and concerning problems of housing, condonation of certain debts and exemption from the obligation of military service for the sons of the victims.

In the same context the Report proposes the creation of an autonomous Foundation of Public Law, under a Counsel of the highest level and prestige that will pursue the tasks of "trying to determine the whereabouts of the victims" of a disappearance; to rule in cases of possible victims about whom the Commission did not arrive at a full conviction: to centralize and to keep records and antecedents on the violation of Human Rights; to lend legal counsel and social assistance to the relatives of the victims and other functions established by law.

Faced with the problem of "determining the whereabouts of the victims" in the cases of "detained-disappeared" and "executed without delivery of the remains to their families" it proposes to penalize the concealment of this kind of information", while giving guarantees of reserve and exemption of responsibility for their eventual participation, to those that will provide this information (Pg. 1161)"

B.- Prevention of possible violations.

After stating that "at the time in which these violations

2

were perpetrated there was no national conscience in Chile of the imperative duty to respect Human Rights", the Report formulates a number of suggestions to improve the national legislation on the matter; to upgrade the Judiciary so that it may fully perform its role of guarantor of the essential rights of the people; to achieve in the Armed Forces and Police and Security Forces a full conscience of the value of Human Rights and their subsequent commitment to respect them in the exercise of their functions; to create an institution whose mission would be to protect Human Rights and to try to consolidate, starting from the educational system and in all spheres of social life, a culture truly respectful of Human Rights .

3° Victims

In a second volume of 635 pages, the Report includes a brief biography, in alphabetical order, of each one of the 2279 persons about which it had reached the full conviction that they had died or disappeared as victims of the violation of their Human Rights or as victims of political violence, among them 132 members of the Armed Forces or the Police.

After this summary of the Report it is to be hoped that all Chileans will read it and ponder it. I invite you to do so.

and those who were to investigate it did not do so. It is therefore easy to explain that so many people, perhaps the majority, did not believe that these violations were taking place. And this discrepancy was a new factor of division and animosity among Chileans.

The Report I am releasing today to the knowledge of the people clarifies the truth. In consideration of the information of the Report and of the quality of its authors- several of which were in favour of and collaborated with the former regime- this truth must be accepted by all. No person of good faith could possibly ignore it.

I am not saying that this is an "official" truth. The State has no right to "impose" a truth. But, convinced as I am of the veracity of the Report, I appeal to all my fellow countrymen to assume it and to act consequently. However cruel and painful this truth may be, if shared by all, it removes one motive of contention and division among Chileans.

The recognition of this truth is independent of the vision each one may have on the political situation of the time, or on the legitimacy of the events of September 11th, 1973. History will be the judge. However, no outlook on the matter erases the fact that those violations of Human Rights described in the Report, really took place. Quoting one of its passages " the situation on September 11th, 1973 and

its consequences objectively endangered Human Rights and facilitated their transgression, but in no case can they justify it" (Pg. 24)

Neither is it possible to invoke, in order to deny or ignore this truth, a supposedly existing "state of war" nor the need to defend the country from terrorism. We all know, and the Report establishes it- that the Armed Forces and the Police took full control of the country in a very short time, actually in a few days. On the other hand, war also has its laws: nothing can justify the torture and execution of prisoners, nor the disappearance of their remains.

2-º The subject of forgiveness and reconciliation

Many Chileans consider that the time has come to put a "full stop" to this matter. For the good of Chile we must look towards the future that will bring us together rather than towards the past that separates us. We still have so much to do in order to build a truly democratic society and reach social justice that we cannot afford to waste our efforts in scrutinizing irremediable wounds. And they remind us of the words of His Holiness Pope John Paul the 11nd when he visited Chile: "Chile has a vocation of understanding, not of confrontation. We cannot progress by widening our divisions. This is the time for pardon and reconciliation".

13

Who could fail to share these aspirations? However, in order to fulfil them it is necessary to determine who are the persons offended that are requested to forgive and who are the offenders that must be forgiven. I cannot forgive on behalf of somebody else. Forgiveness cannot be imposed by decree. Forgiveness requires repentance on one side and generosity on the other.

When those who caused so much suffering were agents of the State and the competent bodies of that State could not or did not know how to prevent it or sanction it, and in the absence of the necessary social reaction against it, the State and the whole of society are responsible, through action or omission. The Chilean society is then in debt towards the victims of the violations of Human Rights.

This is the reason why the suggestions on moral and material reparation put forward in the Report are shared by all sectors of society.

This is the reason why I dare assume, in my capacity as President of the Republic, the representation of the whole nation, to beg forgiveness from the relatives of the victims.

And again, this is the reason why I solemnly ask the Armed Forces and the Police and all those who were involved

in the excesses that were committed, to recognize the suffering inflicted and to make an effort to alleviate it.

The people of Chile have always loved and admired their Armed Forces and the Carabineros (Police) . They are identified with the glories of our Homeland, with the courageous spirit of the Chileans and with generous actions in daily life as well as in serious emergencies. The aspirations of reconciliation in a truly united Chile, demand the removal of obstacles that still hurt those feelings. We must all contribute to this end.

On more than one occasion I have said that my greatest aspiration as a ruler is to attain national unity in democracy. This aspiration demands of all and each one of us, a great effort to try to put ourselves in the place of others and to endeavor to understand them, with humility to recognize our own faults and limitations and generosity to forgive those of others.

3°The subject of Justice

Justice is the highest of social virtues, and the irreplaceable foundation of peace.

We know that due to the limitations proper to human condition, perfect justice is generally unattainable in this world. Nevertheless, this cannot check our aspirations to arrive at the highest possible level of justice.

Justice is not revenge: on the contrary, it excludes it. A crime is not punished or repaired by committing another crime of the same kind. No one has the right to harm others, even less to attempt a crime against the life of someone else under the pretext of justice. Whoever acts in this way becomes a violator of Human Rights and deserves the condemnation of society. To accept private vengeance is to substitute law by violence, where the law of the strongest prevails over reason and justice.

On this matter of violations of Human Rights, to clarify and accept the truth, as it emerges from the Report, is already an important part of the process of justice in favour of the victims. Also considered as acts of justice are the rehabilitation of their moral character and dignity and the reparation to their families that the Report proposes.

But this is not enough. Justice also demands information on the whereabouts of the disappeared and the individualization of personal responsibilities .

As to the first aspect, the truth established in the Report is incomplete since in most cases of persons detained-disappeared and executed without delivery of their remains to their families, the Commission was unable to find their whereabouts.

As to the determination of responsibilities, this is a task that in a State of Law belongs to the Courts of Justice, in conformity to the juridical order and with the guarantee of a fair trial. The Commission of Truth and Reconciliation could not engage in this field, since the decree itself that created it, denied it this faculty by virtue of clear constitutional prescriptions.

In both cases, the Commission has sent the respective data to the corresponding tribunals. I hope the latter will duly comply with their duty and exhaust the investigations, an action that in my view, cannot be hindered by the amnesty law currently in force.

4° Terrorism and Violence

The concepts expressed should not be interpreted by anyone as signs of tolerance or weakness in the struggle against terrorism and violence of extreme factions.

It is the decision of my Government to struggle vigourously against terrorism and any form of violence, wherever it comes from. The main thing is to find efficient mechanisms to defeat them and to put an end to their actions. The experience of other countries shows that the channels of law are more effective than armed confrontation. We refuse to accept that, in order to fight terrorism that should be rejected because it violates Human Rights, we must use methods that incur in the same violations. Those morally unacceptable methods, in practice contribute to feed the very spiral of violence.

111 DECISIONS

In view of the Report I have just summarized, and taking into account the above considerations and in order to face the problems derived of the violations of Human Rights with full responsibility, effectiveness and as promptly as possible, I deem it necessary to adopt the following measures:

1° I make a strong appeal to all my fellow countrymen to accept the Truth expressed in the Report and to adjust their conduct to this recognition;

2° In the spirit of the Report, I proclaim publicly and

solemnly the rehabilitation of the victims's moral dignity ,
insofar as they have been charged with crimes that were
never proved and about which they had neither the
opportunity nor the adequate means to defend themselves.

3°- In the course of this month the Government will submit
to the National Congress a draft law to implement the
proposals of the Report to grant a reparation pension to the
next of kin of the victims, a special procedure of
declaration of death of persons detained-disappeared and
other benefits of a social nature, as well as the creation
of an institution of Public Law to take over the tasks
indicated in the Report.

4° This very day I have sent to the Supreme Court an
official communication in which I include the text of the
Report asking it to instruct the corresponding courts, by
virtue of its authority, to activate with full diligence
the trials currently pending on the violations of Human
Rights. These trials and future ones must be instructed
following the antecedents provided by the Commission of
Truth and Reconciliation, with the indication that in my
view, the amnesty law currently in force that the Government
respects, cannot be an obstacle to the pursuit of judicial
investigations to determine responsibilities, particularly
in the cases of persons who have disappeared.

5°- The Government will request through the Minister of Justice and in compliance with art. 26 bis of the Code of Penal Procedure, the intervention of the Public Prosecutor in first instance, every time it deems it necessary;

6°- I have personally asked the Commanders in Chief of the Armed Forces and the General Director of Carabineros (the Police Force) for the cooperation of their institutions to establish the whereabouts of the persons detained-disappeared and those executed whose remains have not been delivered to their next of kin;

7° The Government will issue special instructions to the Services of Order and Security (Police) to lend the most diligent cooperation to the Courts of Justice for the success of the investigations in reported cases.

8°- The proposed law put forward by the Chilean Chapter of the Ombudsman and that the Government has adopted, will soon be submitted to Congress. The proposal is to create the institution of the Defensor of the People that will mainly be in charge of protecting the respect and full enforcement of Human Rights; and

9°- Finally, the Ministry of Justice will form, as soon as possible, a working team to draft the necessary proposed

laws to introduce in our legislation the reforms that the Commission of Truth and Reconciliation suggests, for a better protection of Human Rights.

Independently of the above considerations, I think this is a good opportunity to announce that, in coincidence with some of the suggestions of the Report, the Government has already prepared the necessary draft projects to perfect and modernize the Administration of Justice. Since this is a matter about which there is a vast national consensus, my objective is to promptly achieve the agreements necessary to submit this judiciary reform, in terms that will facilitate its debate and approval by Congress as soon as possible .

IV APPEAL TO ALL CHILEANS

At the end of this presentation, I make an appeal to my fellow countrymen to assume this truth with courage and responsibility. We must be able to draw lessons from this experience so that NEVER MORE will such a thing occur in Chile. This is a task for all of us and no one can be excluded.

If grief, horror and a justified anger were to drive us to hatred and violence, we would soon fall in the same pattern we condemn. This would mean to start again a war between brothers, to destroy our rising democracy and to renounce

21

to the aspirations of peace that we all cherish.

All Chileans may be certain that the Government will fulfill its obligations within the moral principles that inspire it, with no other aim than justice, reconciliation and the common good of the country.

But this task does not only belong to the Government. It is also the task for the other Powers of the State, for the Armed Forces, the moral authorities, the social organizations and the whole of the national community.

I ask for the cooperation of all, so that jointly, with mutual respect and support, with understanding and generosity we may be able to heal the wounds of the past and to build a future of justice, progress and peace for Chile.

March 4th, 1991